



Asamblea General

Distr. general
16 de abril de 2014
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

Foro sobre las empresas y los derechos humanos

Segundo período de sesiones

2 a 4 de diciembre de 2013

Resumen de las deliberaciones del Foro sobre las empresas y los derechos humanos, preparado por el Presidente, Makarim Wibisono

Resumen

El presente documento contiene un resumen de las deliberaciones del segundo período de sesiones anual del Foro sobre las empresas y los derechos humanos, celebrado del 2 al 4 de diciembre de 2013. Ofrece una breve visión de conjunto de la estructura de la reunión y de los actos oficiales, y debe leerse como un resumen sinóptico juntamente con las notas conceptuales de las sesiones, las declaraciones y las comunicaciones escritas recibidas y las grabaciones en red de las sesiones que se pueden consultar en el sitio web del Foro.

GE.14-13641 (S) 231014 241014



* 1 4 1 3 6 4 1 *

Se ruega reciclar



Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1–5	3
II. Participación	6–12	3
III. Síntesis del programa	13–14	4
IV. Actividades paralelas	15–21	5
A. Consulta sobre un fondo mundial	15–16	5
B. Formación sobre los Principios Rectores	17	5
C. Actividades paralelas regionales.....	18	5
D. Sesiones previas al Foro destinadas a determinados interesados	19	6
E. Otras actividades paralelas	20–21	6
V. Resumen de las sesiones oficiales.....	22–123	6
A. Sesión de apertura.....	23–27	6
B. Hacia la aplicación global de los Principios Rectores: ampliar la participación de todas las regiones	28–32	7
C. La defensa de los derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales en entornos complejos: problemas que afrontaban los defensores de los derechos humanos y función de los Estados y las empresas	33–37	8
D. 3 de diciembre, opción 1 (paneles simultáneos): el acceso a medios de reparación	38–47	9
E. 3 de diciembre, opción 2 (paneles simultáneos): cuestiones fundamentales de actualidad	48–56	11
F. 4 de diciembre, opción paralela 1	57–73	13
G. 4 de diciembre, opción paralela 2	74–87	15
H. 4 de diciembre, opción paralela 3	88–102	18
I. 4 de diciembre, opción paralela 4	103–118	20
J. Panel de clausura: prioridades y cuestiones fundamentales para 2014.....	119–123	23

I. Introducción

1. En su resolución 17/4, el Consejo de Derechos Humanos creó un Foro anual sobre las empresas y los derechos humanos que quedaría bajo la dirección del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. El Foro se estableció para a) examinar las tendencias y los problemas de aplicación de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (A/HRC/17/31, anexo); b) promover el diálogo y la cooperación acerca de las cuestiones relacionadas con las empresas y los derechos humanos, incluidos los problemas de determinados sectores, ámbitos de operación o en relación con derechos o grupos específicos y c) definir las buenas prácticas.
2. El segundo Foro anual sobre las empresas y los derechos humanos se celebró en Ginebra del 2 al 4 de diciembre de 2013.
3. De conformidad con la resolución 17/4, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos designó al Presidente del Foro, Makarim Wibisono, que fue elegido a título personal y se encargó de preparar el presente informe resumido para su distribución al Grupo de Trabajo y a todos los participantes en el Foro.
4. Los preparativos del Foro se realizaron bajo la dirección del Grupo de Trabajo, que dispone de una estrategia para maximizar la capacidad del Foro como una importante cita anual que permita a las partes interesadas de todas las regiones entablar un diálogo sobre la actividad empresarial y los derechos humanos y fortalecer la voluntad de alcanzar la meta de la aplicación efectiva y global de los Principios Rectores. Entre esos preparativos el Grupo de Trabajo hizo un llamamiento a los interesados para que hicieran aportaciones sobre posibles temas y cuestiones fundamentales. Se recibieron más de 70 comunicaciones¹.
5. En gran medida gracias a una generosa contribución del Gobierno de Noruega y a las aportaciones sustantivas y generales de muchos interesados fue posible ampliar el alcance y la magnitud de la reunión.

II. Participación

6. La multiplicidad de las partes interesadas, característica exclusiva del Foro, se deriva de la resolución 17/4 en la que el Consejo de Derechos Humanos establece que el Foro estará abierto a la participación de interesados, sectores y disciplinas pertinentes, en particular los Estados, los mecanismos y entidades de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones y mecanismos regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las empresas y las asociaciones empresariales, sindicatos, académicos y expertos, representantes de los pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales y las partes interesadas afectadas.
7. El Foro era la mayor reunión mundial celebrada hasta la fecha para examinar los progresos logrados y los problemas que se planteaban al abordar la repercusión de las actividades de las empresas en los derechos humanos y la aplicación de los Principios Rectores, con un total de 1.489 personas inscritas previamente.
8. Se estima que asistieron más de 1.500 personas procedentes de más de 110 países. El 14% de los participantes inscritos pertenecía a delegaciones de los Estados, el 11% a empresas y asociaciones empresariales, el 36% a la sociedad civil, el 10% al mundo académico, el 4% a instituciones nacionales de derechos humanos, el 6% a bufetes de abogados, servicios de asesoramiento empresarial y consultorías, el 5% al sistema de las

¹ Véase <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013ForumonBusinessandHumanRights.aspx>.

Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, y el 1% a federaciones sindicales. Hubo igual número de hombres y mujeres participantes.

9. Además de los fondos facilitados por el Gobierno de Noruega, el Gobierno de Suiza proporcionó recursos financieros para apoyar la asistencia al Foro anual de participantes de países y grupos de interesados insuficientemente representados. Friedrich Ebert Stiftung Geneva prestó asistencia al Grupo de Trabajo y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en la organización del viaje de algunos participantes de esos países y grupos, que recibieron apoyo al respecto.

10. Todos los grupos regionales de las Naciones Unidas² estuvieron representados en el – Foro: el 16% de las personas inscritas procedía de África, el 12% de Asia, el 4% de Europa Oriental, y el 12% de América Latina y el Caribe. El Grupo de Europa Occidental y otros Estados – que incluye a Australia, el Canadá, Israel, Nueva Zelandia y los Estados Unidos – estuvo representado por el 56% de los inscritos.

11. De los 1.489 participantes inscritos previamente, 112 eran representantes de empresas (además de los 50 que indicaron que pertenecían a una asociación comercial o industrial). Estuvieron representados varios sectores, y un tercio de los participantes de empresas señalaron que pertenecían al sector extractivo.

12. Durante los debates del Foro se transmitió reiteradamente el mensaje de que era necesario ampliar la participación de las empresas.

III. Síntesis del programa

13. El objetivo general del Foro sobre las empresas y los derechos humanos, tal como lo definió el Consejo de Derechos Humanos, es promover la divulgación y aplicación efectiva de los Principios Rectores y fomentar el diálogo y la cooperación entre los distintos interesados acerca de las cuestiones relacionadas con las empresas y los derechos humanos. El programa se estructuró en torno a la definición de los problemas y las oportunidades asociados a grupos y sectores concretos y a cuestiones estratégicas fundamentales.

14. El Foro incluyó 20 paneles oficiales y 25 actividades paralelas durante tres días³. La "vispera" del Foro, el 2 de diciembre, se ofrecieron: a) sesiones de formación sobre los Principios Rectores; b) actividades paralelas con exposiciones sobre iniciativas e instrumentos innovadores, así como casos de aplicación práctica y problemas nacionales; c) sesiones paralelas organizadas por el Grupo de Trabajo, centradas en las tendencias y problemas regionales de la aplicación de los Principios Rectores; y d) sesiones orientadas a determinados interesados a fin de prestar asistencia para el futuro intercambio de prácticas y perspectivas sobre los problemas. Los días 3 y 4 de diciembre se celebraron sesiones plenarias y paneles paralelos oficiales.

² Véase <http://www.un.org/depts/DGACM/RegionalGroups.shtml>.

³ En relación con el programa y las descripciones de conceptos, véase <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession2/A-HRC-FBHR-2013-CRP-1.pdf>. Para consultar las grabaciones en vídeo de las reuniones, las comunicaciones de los interesados, las declaraciones y comunicaciones escritas de los panelistas, véase <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013ForumonBusinessandHumanRights.aspx>.

IV. Actividades paralelas

A. Consulta sobre un fondo mundial

15. El Secretario General de las Naciones Unidas determinó que la falta de capacidad de todos los principales actores era un obstáculo importante para la promoción del programa relativo a las empresas y los derechos humanos y la aplicación de los Principios Rectores⁴. Posteriormente, el Consejo de Derechos Humanos pidió al Secretario General que realizara un estudio de viabilidad sobre el establecimiento de un fondo mundial con objeto colmar esa laguna. En él se deberían examinar la forma de conseguir la participación de los múltiples interesados, los modelos de gobernanza y las opciones de financiación. Los interesados deberían participar en un proceso de consulta por vía de canales existentes como el Foro sobre las empresas y los derechos humanos⁵.

16. Con este fin, durante el Foro se celebró una consulta organizada por el ACNUDH. Entre las cuestiones que se debatieron durante la reunión cabía citar: a) cómo identificar, poner en marcha y evaluar con mayor eficacia proyectos susceptibles de recibir ayuda; b) cómo asegurar la participación de los titulares de derechos y los representantes de la comunidad local en el proceso de adopción de decisiones; c) las diversas funciones que los organismos y programas de las Naciones Unidas podían desempeñar en esa iniciativa; y d) la posibilidad de que el fondo contara con una amplia gama de contribuyentes, incluidos Estados, empresas, fundaciones y otros actores.

B. Formación sobre los Principios Rectores

17. Uno de los objetivos del Foro de 2013 fue brindar una oportunidad para la creación de capacidad. Para ello, el día anterior al Foro incluyó las actividades paralelas "Plataforma sobre instrumentos, innovación y fomento de la capacidad" y "Presentación de determinados casos, investigaciones y buenas prácticas nacionales", que ofrecieron a los participantes la posibilidad de compartir información sobre sus iniciativas, así como breves cursos de formación sobre los Principios Rectores en español, francés e inglés⁶. Antes de que se celebrara el Foro, la Secretaría facilitó una lista no exhaustiva y en continua evolución de diferentes instrumentos y documentos de orientación sobre las empresas y los derechos humanos⁷. La nota oficial de la Secretaría incluía una versión resumida de las "Preguntas más frecuentes" sobre los Principios Rectores⁸.

C. Actividades paralelas regionales

18. Con el apoyo de los Gobiernos de la Argentina, la Federación de Rusia, Ghana, la India y Noruega, el Grupo de Trabajo organizó una actividad paralela la víspera del Foro, el día 2 de diciembre, que incluyó debates abiertos sobre cada una de las regiones de las Naciones Unidas (África, Asia, Europa Oriental, América Latina y el Caribe, y Europa Occidental y otros Estados). Esos debates brindaron a los interesados la oportunidad de conocer tendencias fundamentales de la región y de participar en las actividades del Grupo de Trabajo para examinar experiencias en relación con problemas, oportunidades y enseñanzas extraídas de la aplicación de los Principios Rectores.

⁴ A/HRC/21/21.

⁵ Resolución 21/5 del Consejo de Derechos Humanos.

⁶ Véase <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013FBHRParticipation.aspx>.

⁷ Véase <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession2/ListOfReferences.pdf>.

⁸ Véase A/HRC/FBHR/2013/2, disponible en <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013FBHRDocumentation.aspx>.

D. Sesiones previas al Foro destinadas a determinados interesados

19. Con objeto de ofrecer plataformas para el intercambio de información entre homólogos a grupos de interesados, la víspera del Foro se organizaron actividades paralelas destinadas a determinados interesados. Esas actividades brindaron a integrantes de un mismo grupo la oportunidad de mantener debates organizados de forma autónoma para que los participantes pudieran intercambiar perspectivas y enseñanzas extraídas respecto de la aplicación de los Principios Rectores. Se celebraron cinco sesiones simultáneas para los siguientes grupos: gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos, y pueblos indígenas. Los principales temas de debate de cada una de esas reuniones se comunicaron posteriormente a la sesión plenaria oficial de apertura del Foro (véase la sección V.A).

E. Otras actividades paralelas

20. A fin de alentar el intercambio de experiencias, buenas prácticas, investigaciones, instrumentos e innovaciones entre múltiples interesados y de ofrecer a los participantes la oportunidad de mantener sus propios debates temáticos, se estableció un proceso abierto para presentar propuestas de actividades paralelas. Las decisiones sobre las actividades paralelas de tomaron sobre la base de la disponibilidad de espacio, la pertinencia del tema propuesto para el mandato del Foro, la posible superposición del tema de la actividad paralela con un panel durante la sesión oficial, así como la necesidad de asegurar el equilibrio entre los diversos interesados y la pertinencia global. Se recibieron casi 60 propuestas de actividades y exposiciones paralelas, que se sumaron a las más de 70 comunicaciones presentadas al Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas.

21. Debido al elevado número y a la amplia variedad de las propuestas recibidas, se combinaron varias actividades paralelas y se alentó la colaboración cuando fue posible⁹.

V. Resumen de las sesiones oficiales

22. En las siguientes secciones se ofrece un breve resumen de los debates mantenidos durante las sesiones plenarias y las sesiones simultáneas oficiales. El resumen no pretende reflejar plenamente los debates, excluye los que se celebraron la víspera del Foro, o los que se mantuvieron durante las actividades paralelas, y solo ofrece una breve exposición de algunas de las principales intervenciones y cuestiones presentadas. Se aconseja a los lectores que consulten los vídeos de los paneles oficiales del Foro si desean acceder a las deliberaciones completas.

A. Sesión de apertura

23. La sesión de apertura fue presidida por el Presidente del Foro, Sr. Wibisono. Pronunciaron declaraciones de bienvenida el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Remigiusz A. Henczel; la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay; y la Presidenta del Grupo de Trabajo, Alexandra Guáqueta.

24. Durante la primera parte de la sesión, todos los oradores mencionaron la importancia de los Principios Rectores y señalaron que su aprobación por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 fue un hito para los derechos humanos en el mundo. También señalaron

⁹ Véase el programa de las actividades paralelas en <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013FBHREvents.aspx>.

que su aplicación no sería posible sin la participación de todos los interesados y que la labor centrada en la aplicación debía ser exhaustiva, y no parcial, y debía abarcar los tres pilares para obtener resultados satisfactorios.

25. Los oradores reiteraron la importancia del Foro, pusieron de relieve su función en el fomento de un verdadero diálogo entre múltiples interesados y, habida cuenta de la elevada tasa de participación, señalaron la prioridad que se había otorgado a la cuestión de las empresas y los derechos humanos en el mundo. Como resultado de la aplicación de los Principios, muchas empresas estaban adoptando medidas firmes para hacer frente a las consecuencias en grupos específicos, entre ellos los pueblos indígenas y los niños, y habían comenzado a examinar de forma más rigurosa los procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos y la provisión de medios de reparación. Muchos Estados también estaban elaborando planes de acción, pero aún quedaba mucho por hacer.

26. La Presidenta del Grupo de Trabajo destacó los principios fundamentales que habían orientado su labor durante la preparación del Foro: a) el énfasis en los tres pilares de los Principios Rectores; b) el firme apoyo al diálogo entre múltiples interesados y el pragmatismo de principios; c) la promoción de la necesidad de complementar el poder disuasivo de las decisiones judiciales con incentivos o desincentivos de mercado para maximizar la prevención; d) el compromiso con los interesados a nivel regional, que se puso de manifiesto en el primer Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, celebrado del 28 al 30 de agosto de 2013 en Colombia; e) la necesidad de que en la aplicación práctica de los Principios Rectores se tuvieran en cuenta los contextos locales y regionales, y también los sectoriales; f) la necesidad de hacer frente a la impunidad; g) la concesión de particular atención a las personas que vivían en situación de vulnerabilidad, expresada en el Foro mediante sesiones centradas especialmente en las repercusiones de las actividades empresariales en los pueblos indígenas, los niños y los trabajadores migrantes; y h) el reconocimiento de que un solo grupo de interesados no podía resolver los problemas que planteaba la cuestión de las empresas y los derechos humanos.

27. Durante la segunda parte de la sesión, los oradores designados para participar en las sesiones del día anterior destinadas a determinados interesados informaron sobre sus respectivas reuniones. El representante estatal señaló que el principal problema que planteaba la elaboración de planes de acción nacionales para la aplicación de los Principios Rectores estaba relacionado con el logro del pleno respaldo de todos los sectores gubernamentales así como de las empresas. El representante de las instituciones nacionales de derechos humanos destacó la importancia de los enfoques basados en la participación de múltiples interesados. El orador que hizo uso de la palabra en nombre de las empresas señaló que se habían logrado progresos en cuanto a la aplicación pero que seguían planteándose problemas fundamentales: a) la aplicación requeriría tiempo; b) la complejidad de las relaciones empresariales; c) la comunicación sobre el desarrollo de los acontecimientos a los observadores externos; y d) lo que debían hacer las empresas cuando los gobiernos no cumplían sus obligaciones en materia de derechos humanos. El representante de los pueblos indígenas subrayó la importancia del consentimiento libre, previo e informado para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Por último, el representante de la sociedad civil mencionó como obstáculos principales para la aplicación de los Principios Rectores la persistente impunidad de las violaciones de los derechos humanos, la falta de mecanismos de reparación, y la protección de los defensores de los derechos humanos.

B. Hacia la aplicación global de los Principios Rectores: ampliar la participación de todas las regiones

28. La sesión fue presidida por el Presidente del Foro, Sr. Wibisono. Participaron en el panel Philippe Boillat, del Consejo de Europa; Med Kaggwa, de la Comisión Africana de

Derechos Humanos y de los Pueblos; Rafendi Djamin, de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN); y María Claudia Pulido, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

29. El propósito de esta sesión era determinar las brechas respecto de la aceptación efectiva de los Principios Rectores en el mundo, las oportunidades para reforzar la difusión regional, las funciones que desempeñaban actualmente las organizaciones regionales, y las medidas que debían adoptar los Estados, las organizaciones y los mecanismos regionales, las empresas y otros interesados.

30. Alexandra Guáqueta, Presidenta del Grupo de Trabajo, expuso unas reflexiones sobre los resultados de las sesiones paralelas previas al Foro centradas en las regiones. Puso de relieve la función que deberían desempeñar las instituciones regionales. Los bancos y las corporaciones financieras podían armonizar sus políticas de salvaguardias, las organizaciones políticas podían pedir que los Estados dispusieran de planes nacionales de aplicación, y los tribunales y comisiones regionales de derechos humanos podían armonizar sus sanciones con las expectativas que los Principios Rectores establecían para las empresas en cuanto a la reparación. La oradora también dijo que las instituciones regionales podían utilizar los Principios Rectores como base para el diálogo, y contribuir así a prevenir una mayor polarización y conflictos en determinados contextos locales.

31. El orador del Consejo de Europa informó al Foro sobre la labor en curso para formular una declaración en apoyo a los Principios Rectores y elaborar un instrumento no vinculante con miras a colmar lagunas, en cooperación con el sector privado y la sociedad civil. El orador de la Comisión Africana observó que la Comisión había establecido un grupo de trabajo sobre derechos humanos y que las industrias extractivas habían comenzado a analizar las violaciones cometidas en ese sector. El representante de la ASEAN señaló que en Asia la aplicación seguía planteando un problema, y destacó que era preciso conocer mejor las cuestiones, incluidos los problemas a los que se enfrentaban las empresas pequeñas y medianas. La oradora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicó la forma en que la jurisprudencia del Tribunal Interamericano había contribuido a la aplicación de los Principios Rectores y a afrontar los problemas y dilemas pendientes.

32. Los participantes hicieron referencia a los planes de acción nacionales de Francia y el Reino Unido, así como al proceso de la Unión Europea (UE) para la promoción de esos planes. Se mencionaron las guías de la UE para los tres sectores industriales y para las empresas pequeñas y medianas. Se examinaron en particular las siguientes cuestiones: la primacía de la obligación del Estado de ofrecer protección; los problemas que planteaba el sector no estructurado; la extraterritorialidad; las repercusiones en los pueblos indígenas; la criminalización de los defensores de los derechos humanos; y los problemas que planteaba la integración de los derechos humanos en los acuerdos de libre comercio.

C. La defensa de los derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales en entornos complejos: problemas que afrontaban los defensores de los derechos humanos y función de los Estados y las empresas

33. Michael K. Addo, miembro del Grupo de Trabajo, actuó como moderador. El panel de múltiples interesados estuvo integrado por: Paul Arkwright, del Gobierno del Reino Unido; Philip Jordan, de Total S.A.; Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; y Marietta Paragas, de Shontoug Foundation.

34. El propósito de esta sesión era definir los problemas que afrontaban los defensores de los derechos humanos que estaban encarando repercusiones negativas vinculadas a operaciones empresariales, así como examinar la forma en que los Principios Rectores aclaraban las responsabilidades y las opciones normativas de los Estados, y las medidas de diligencia debida en materia de derechos humanos para las empresas, y ofrecer orientaciones sobre las acciones necesarias.

35. Joseph Stiglitz, laureado con el Premio Nobel, pronunció el discurso principal de introducción. En sus observaciones subrayó que los argumentos en favor de la eficiencia económica solían ignorar las consecuencias obvias de las actividades empresariales en los trabajadores, la comunidad donde realizaban sus operaciones, y la sociedad de forma más general, y defendió un enfoque basado en los derechos fundamentales que tuviera en consideración los intereses de un mayor número de partes interesadas. Pidió que se elaborara un acuerdo internacional vinculante en el que se consagraran normas de responsabilidad empresarial para que las empresas rindieran cuentas por sus violaciones de los derechos humanos.

36. El representante del Gobierno del Reino Unido señaló que un elemento clave para poder abordar los riesgos que afrontaban los defensores de los derechos humanos era aunar el compromiso de los gobiernos, la industria y la sociedad civil. Explicó cómo el plan de acción del gobierno para la aplicación de los Principios Rectores podía ofrecer un marco nacional para tratar esta cuestión. El orador de Total señaló que una enseñanza extraída por su empresa era la importancia de contar desde un principio con la participación de las comunidades y con evaluaciones de las consecuencias. La Relatora Especial observó que los defensores que se dedicaban a cuestiones relacionadas con el acceso a la tierra, los recursos naturales y las cuestiones ambientales, y los que estaban luchando contra los desalojos ilegales o forzosos en el contexto de megaproyectos, eran particularmente vulnerables a las amenazas, el acoso, la intimidación, la criminalización y las agresiones físicas. La oradora formuló en particular las siguientes recomendaciones para reducir las tensiones: el acceso a la información para los titulares de los derechos, la participación de los titulares de los derechos en la adopción de decisiones, y el acceso a mecanismos de reclamación a nivel comunitario. El panelista de la sociedad civil declaró que las repercusiones negativas en los derechos humanos en el contexto de operaciones empresariales eran cada vez mayores, se debían a la creciente militarización y se caracterizaban por el acoso de los defensores de los derechos humanos y la matanza de personas pertenecientes a pueblos indígenas. Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades indígenas habían venido trabajando para hacer frente a esas cuestiones mediante la formación de grupos de apoyo, el fomento de la capacidad, la promoción y la investigación.

37. Los debates se centraron en las nuevas medidas que podían utilizarse para promover y proteger los derechos humanos y conceder protección a los defensores de esos derechos en el contexto de operaciones empresariales, en particular la necesidad de contar con un mayor apoyo a nivel internacional, y de seguir elaborando y aplicando planes de acción nacionales. Se debatió la posibilidad de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante, y se expresaron diferentes opiniones sobre la oportunidad, la eficacia y la viabilidad de esa propuesta.

D. 3 de diciembre, opción 1 (paneles simultáneos): el acceso a medios de reparación

1. Superar los obstáculos que dificultaban el acceso a recursos judiciales efectivos

38. Michael K. Addo, miembro del Grupo de Trabajo, actuó como moderador del panel y formularon observaciones Simon Minks, de la Oficina del Fiscal General de la Fiscalía de los Países Bajos; Richard Meeran, de Leigh Day; Brent Wilto, de la Organización

Internacional de Empleadores; Elida Cristina, de Tz'ununija (Guatemala); y Seema Josh, de Amnistía Internacional.

39. El propósito de esta sesión era definir estrategias que permitieran superar los obstáculos a la justicia a los que se enfrentaban las víctimas de las consecuencias de la actividad empresarial en los derechos humanos.

40. En las exposiciones se destacó que seguían planteándose problemas importantes al tratar de asegurar la aplicación adecuada del tercer pilar de los Principios Rectores y el acceso a recursos judiciales efectivos para las personas afectadas por violaciones de los derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial. Se determinó que en algunos países la fragilidad del estado de derecho era un problema importante. En consecuencia, era prácticamente imposible que en esos países las víctimas pudieran acceder a recursos judiciales en el ámbito local o nacional. Los intentos de someter causas a los tribunales en otras jurisdicciones en nombre de las víctimas también tropezaban con graves obstáculos prácticos y jurídicos.

41. El panel deliberó sobre los problemas a los que se enfrentaban los Estados al enjuiciar a empresas en relación con violaciones de los derechos humanos y respecto del acceso de las víctimas a un abogado, un requisito previo importante del acceso a la justicia. Para que progresaran satisfactoriamente los casos contra empresas matrices en los países de origen, los Estados tenían que tener la voluntad genuina de interponer una acción judicial y evaluar de forma exhaustiva el fondo de la causa para no generar falsas expectativas. Muy pocos abogados estaban dispuestos a interponer demandas contra una empresa grande porque en general era necesario financiarlas durante largos períodos y el resultado de las causas era incierto debido a su novedad. Las personas y las comunidades marginadas, por ejemplo los pueblos indígenas, solían hacer frente a problemas adicionales en el acceso a los recursos judiciales. También se destacó que, si bien las reclamaciones de indemnización podían resultar útiles como elemento disuasorio importante, los arreglos financieros con las empresas solían menoscabar el acceso a los recursos judiciales para las víctimas. Otros problemas estaban relacionados con la vigilancia a largo plazo de la repercusión de las violaciones cometidas por las empresas, por ejemplo, el vertido de desechos tóxicos.

42. Otros participantes pusieron de relieve: a) la falta de propuestas sobre la forma de mejorar el acceso a los recursos judiciales; b) la eficacia de las soluciones locales; c) el tiempo necesario para crear capacidad local; y d) la necesidad de disponer de acceso a medios de reparación en los países "de origen".

2. Recursos no judiciales: ¿estaba obteniendo la práctica sobre el terreno resultados de recursos efectivos ?

43. Alexandra Guáqueta, Presidenta del Grupo de Trabajo, actuó como moderadora. El panel estuvo integrado por: Loretta Rosales, del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos; Karin Buhmann, representante del punto de contacto nacional de los Países Bajos; Laura Safer Espinoza, de Fair Food Standards Council; Joris Oldenziel, de SOMO y OECD Watch (de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos); y Dwight Justice de la Confederación Sindical Internacional.

44. El propósito de esta sesión era definir los principales elementos que permitían el funcionamiento de mecanismos no judiciales de reclamación regidos por los criterios de eficacia establecidos en los Principios Rectores, los elementos de los resultados de recursos efectivos, y las medidas que debían adoptar los Estados, las empresas y otros interesados para promover el acceso a la reparación mediante recursos no judiciales de reclamación como complemento de los mecanismos judiciales.

45. En las exposiciones se señaló que los recursos no judiciales podían generar resultados tangibles y promover la reconciliación, y podían ser un mecanismo para dar una respuesta rápida a las reclamaciones a nivel local. A diferencia de los recursos judiciales, permitían crear unas relaciones sociales más armoniosas y también podían aportar contribuciones importantes para generar cambios en la cultura empresarial. Los recursos judiciales y no judiciales debían utilizarse conjuntamente, pero unos podían ser más apropiados que otros para abordar un problema determinado. Al establecer mecanismos no judiciales era importante recordar que no se violaran derechos humanos. Debía garantizarse, en particular, que los mecanismos no judiciales no menoscabaran el derecho de las víctimas a acceder a recursos judiciales.

46. Se expusieron y examinaron ejemplos de mecanismos no judiciales. El éxito de los recursos no judiciales residía, entre otras cosas, en la confianza que suscitaban, que a su vez dependía de la credibilidad del mecanismo, de su composición, y de la finalidad para la que se estableció, del conocimiento de los derechos humanos en el que se basaban, así como de la eficacia de la reparación que facilitaba. Actualmente, no se evaluaban sistemáticamente la calidad y la eficacia de los mecanismos no judiciales de reclamación, y los estudios iniciales indicaban una amplia variación en las normas. Un estudio realizado en la industria electrónica indicó que los mecanismos de reclamación no se ajustaban a las normas establecidas en los Principios Rectores y hasta la fecha seguían siendo en general ineficaces.

47. Existían tensiones entre el carácter no vinculante asociado a los Principios Rectores, por una parte, y el carácter vinculante de los derechos humanos, en particular el derecho a afiliarse a un sindicato, por otra. Algunos participantes señalaron que era necesario recopilar más información sobre las buenas prácticas, los criterios para obtener resultados satisfactorios y la forma de supervisar la calidad de los mecanismos no judiciales y documentarla. Se recordó que, como establecían los Principios Rectores, ningún mecanismo no judicial de reclamación podía reemplazar los procesos judiciales y los procesos penales.

E. 3 de diciembre, opción 2 (paneles simultáneos): cuestiones fundamentales de actualidad

1. Protección y respeto de los derechos humanos en la esfera digital

48. Puvan Selvanathan, miembro del Grupo de Trabajo, actuó como moderador. Los panelistas fueron: Jermyn Brooks, de Global Network Initiative (GNI); Dan Bross, de Microsoft Corporation; Carly Nyst, de Privacy International; Sophie Mueller, de la Comisión Europea; y Sidsela Nyebak, de Telenor.

49. El propósito de esta sesión era identificar ejemplos de buenas prácticas de los Estados y las empresas, oportunidades para encontrar soluciones en las que intervinieran múltiples interesados y armonizar las prácticas con los Principios Rectores, así como las medidas que debían adoptar los Estados, las empresas y otros interesados para asegurar el cumplimiento eficaz de la obligación de proteger y la responsabilidad de respetar los derechos humanos en la esfera digital.

50. Los panelistas reconocieron y subrayaron que en la era digital las nuevas tecnologías habían creado nuevas formas de promover y proteger los derechos humanos, pero también habían generado nuevos riesgos para la privacidad y la libertad de expresión. Los oradores admitieron que se mantenía un equilibrio delicado entre la libertad de expresión y la privacidad, y la seguridad de la persona en la esfera digital; no obstante, en los últimos años, como ponía de relieve la actual controversia sobre la vigilancia en gran escala, se había producido al parecer un cambio de tendencia hacia la seguridad. Las actuales inquietudes que suscitaban las nuevas tecnologías surgían de un nuevo sentido de desconfianza respecto del gobierno: como resultado de los recientes acontecimientos la

confianza en la seguridad de las comunicaciones en línea había disminuido considerablemente, y era necesario adoptar medidas urgentes para recuperarla.

51. Los oradores aportaron información detallada sobre iniciativas, como la GNI, y empresas que trataban de restablecer esa confianza. El objetivo de la GNI, una iniciativa de múltiples interesados que incluía a algunas de las mayores empresas mundiales de TIC, era proporcionar orientaciones al sector y a sus interesados directos sobre la forma de proteger y promover los derechos humanos de libertad de la expresión y la privacidad frente a la presión de las acciones del Estado que pudieran violar esos derechos. Empresas como Microsoft estaban tomando disposiciones para incorporar los Principios Rectores en sus métodos de trabajo, y al mismo tiempo aplicaban medidas para limitar las consecuencias de la recopilación de datos por el gobierno en el derecho a la privacidad de sus clientes. Quedaba mucho por hacer para asegurar que Internet siguiera siendo un espacio libre y abierto para todos.

52. Otros debates se centraron en: a) las posibles respuestas razonables de las empresas a la controversia sobre la vigilancia en gran escala; b) la garantía del derecho a la reparación en la esfera digital y el sentido de desempoderamiento compartido por el público en general al abordar esta importante cuestión; c) los dilemas a los que se enfrentaban las empresas cuando tenían que responder a los requisitos gubernamentales; y d) las formas de asegurar que las tecnologías de la información respetaran también el derecho a la información de las personas más pobres del mundo.

2. Gestión responsable de la cadena de suministro de conformidad con los Principios Rectores

53. Margaret Jungk, miembro del Grupo de Trabajo, actuó como moderadora de la sesión. El panel estuvo integrado por: Simon Steyne, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Marcela Manubens, de Unilever; Greg Asbed, de Coalition of Immokalee Workers; Jenny Holdcroft, de IndustriAll; y Liang Xiaohu, de China National Textile and Apparel Council y Peking University. El propósito de esta sesión era identificar ejemplos de buenas prácticas empresariales, oportunidades para encontrar soluciones en las que intervinieran los múltiples interesados y para armonizar la gestión de la cadena de suministro con los Principios Rectores, y las medidas que debían adoptar los Estados y el sector empresarial.

54. Los panelistas destacaron la importancia de las causas subyacentes, entre ellas los problemas que planteaba la economía no estructurada en muchos países, por ejemplo, la ausencia de un estado de derecho, la falta de mecanismos de negociación colectiva para los trabajadores, y la falta de aplicación coercitiva por el gobierno, en particular en forma de inspección del trabajo. Las empresas tenían que ser coherentes y pedir a los proveedores que aplicaran las normas de la OIT sobre salud y seguridad, trabajo infantil, trabajo forzoso, negociación colectiva, y libertad de asociación. Se señaló que los Principios Rectores aclaraban los elementos que las empresas tenían que tomar en consideración para cumplir con su responsabilidad. Las empresas deberían elaborar enfoques creíbles, especialmente mediante la coherencia y la transparencia de las políticas, por ejemplo, autorizando una evaluación independiente de sus prácticas.

55. Se hizo hincapié de forma recurrente en que las distintas empresas no podían resolver solas los problemas subyacentes. Era necesario adoptar enfoques basados en la colaboración, en particular mediante la participación de los trabajadores en la elaboración de programas. Se abordaron cuestiones estructurales a nivel macroeconómico y las consecuencias que la imposición de normas más estrictas (y costos más elevados) en un mercado podían tener en las decisiones empresariales. Se destacó la función esencial de la libertad de asociación, como derecho humano y como factor que contribuía al cambio. En este contexto se mencionaron los recientes éxitos de la iniciativa Fair Food Program en Florida y el Acuerdo de Bangladesh.

56. Las intervenciones en sala también pusieron de relieve enseñanzas concretas para tratar las cuestiones de derechos humanos en las cadenas de suministro, en particular las disposiciones del plan de acción nacional del Reino Unido; un código multipartito de suministro para el sector del transporte marítimo en el que participaron empresas danesas de ese sector, una asociación del sector y el gobierno; y la colaboración de empresas del sector del petróleo y el gas, encabezadas por IPIECA, para comprender los riesgos relacionados con los derechos humanos en la cadena de suministro. También se debatieron cuestiones como: a) la necesidad de que las empresas fueran transparentes en cuanto al modo de hacer efectiva la responsabilidad; b) el uso de incentivos de mercado, y determinar si la amenaza de prescindir de los proveedores que no respetaran los derechos humanos era una buena solución; y c) las incoherencias entre las prácticas de compra de las empresas y los compromisos de responsabilidad empresarial.

F. 4 de diciembre, opción paralela 1

1. Los pueblos indígenas y las actividades empresariales: adopción de medidas para la aplicación los Principios Rectores

57. Pavel Sulyandziga, miembro del Grupo de Trabajo, actuó como moderador de la sesión. El panel estuvo integrado por James Anaya, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Eduardo Vega Luna, de la Defensoría del Pueblo de Perú; Arantza Hernanz, que habló en nombre de IPIECA y Repsol; Ivan Chernyakhovskiy de Sakhalin Energy y que habló también en nombre del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; y Joan Carling de Asia Indigenous Peoples Pact.

58. El propósito de esta sesión era definir las principales enseñanzas y las medidas necesarias para la aplicación de las disposiciones relativas a la diligencia debida y al consentimiento libre, previo e informado en materia de derechos humanos y el acceso a la reparación en el contexto de las actividades empresariales que afectaban a los pueblos indígenas.

59. Los panelistas examinaron las violaciones que se producían en una situación común en la que empresas extranjeras que operaban en territorios indígenas no tenían en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, y la necesidad de prever el consentimiento libre previo e informado caracterizado por unas condiciones mínimas descritas brevemente por el Relator Especial. Se expuso un modelo alternativo de desarrollo sostenible que consideraba a los pueblos indígenas como agentes económicos activos. Se observó que la aplicación de elementos del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas ayudaba a asegurar el respeto mutuo al reconocer que los pueblos indígenas eran los propietarios de los recursos. Los panelistas convinieron en que la gestión local de las reclamaciones era el método más efectivo. Era necesario tomar en consideración el derecho consuetudinario para promover la confianza y el respeto mutuos.

60. En las exposiciones se mencionaron varias iniciativas encaminadas a apoyar una aplicación más eficaz del consentimiento libre, previo e informado, por ejemplo, la Guía de referencia para las empresas acerca de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como iniciativas de adhesión a las políticas, que habían dado lugar a la elaboración de procedimientos internos sobre la diligencia debida.

61. El debate se centró en la necesidad de coherencia en la interpretación y la aplicación del derecho al consentimiento libre, previo e informado por Estados, pueblos indígenas y empresas. En este contexto, el cumplimiento y el respeto de las obligaciones contraídas en virtud de tratados de derechos humanos, entre ellas las disposiciones que se centraban en las mujeres y los niños indígenas, sería un avance importante para la aplicación de los Principios Rectores.

2. Seguridad y derechos humanos: armonización de las normas fundamentales con los Principios Rectores de las Naciones Unidas

62. Gare Smith, de Foley Hoag LLP, actuó como moderador. Los panelistas fueron: Claude Wild, del Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza; Mark Wall, de Barrick Gold Corporation; Egbert G.Ch. Wesselink, de IKV Pax Christi; Abiodun Baiyewu, de Global Rights, Nigeria; y Francisco Lloreda, de la Oficina del Presidente de Colombia.

63. El propósito de esta sesión era definir las contribuciones que aportaban y los problemas que planteaban las iniciativas de múltiples interesados como los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos al prevenir y abordar las repercusiones negativas de la actividad empresarial en los derechos humanos en entornos complejos, las principales medidas prácticas respecto de la diligencia debida en materia de derechos humanos y la forma de asegurar la existencia de recursos efectivos en caso de violaciones de los derechos humanos en esos contextos, así como las oportunidades para reforzar la rendición de cuentas y la armonización entre las normas fundamentales pertinentes y los Principios Rectores.

64. En las exposiciones se destacó que los Principios Rectores ofrecían a los gobiernos y las empresas orientaciones de alto nivel sobre las responsabilidades que les incumbían respectivamente de proteger y respetar los derechos humanos, así como de asegurar que existieran mecanismos de reclamación adecuados para las entidades afectadas por sus actividades.

65. Los oradores indicaron que los Principios Voluntarios y el Código de Conducta Internacional para los Proveedores de Servicios de Seguridad Privados ponían en práctica las orientaciones formuladas para el sector extractivo con respecto a la diligencia debida y a la forma de respetar los derechos humanos en el contexto de la prestación de servicios de seguridad. Se puso de relieve que esos instrumentos complementaban los Principios Rectores y no entraban en competencia con ellos, y los oradores alegaron que la aplicación efectiva de los Principios Voluntarios y el Código de Conducta Internacional contribuía al cumplimiento de los principios fundamentales de los Principios Rectores, por ejemplo, al marcar una dirección específica a los gobiernos y los miembros de los sectores extractivo y de la seguridad sobre forma en que podía mantenerse el respeto de los derechos humanos en entornos complejos y difíciles.

66. Los participantes consideraron que los Principios Voluntarios y el Código de Conducta Internacional resultaban más eficaces cuando los participantes incorporaban las mejores prácticas del sector, por ejemplo, al incluirlas en los contratos, impartir capacitación sobre la aplicación, establecer un marco de verificación, y vigilar las deficiencias. Esto era especialmente importante para las empresas cuando trabajaban con agentes del orden público, cuyas actividades no controlaban las empresas.

67. Se destacaron algunos factores que contribuían a la capacidad de las empresas para gestionar los riesgos en materia de seguridad y derechos humanos. Entre ellos cabía citar las medidas de diligencia debida relacionadas con la determinación de riesgos de seguridad, la posibilidad de que se cometieran actos de violencia, el historial de derechos humanos, el estado de derecho, el análisis de conflictos, y las directrices para la transferencia de equipo.

68. Una de las conclusiones a las que se llegó era que el éxito sobre el terreno solía estar vinculado a la disposición de los gobiernos anfitriones para reconocer los problemas de derechos humanos y a la labor realizada con las empresas y los representantes de la sociedad civil para aplicar esas iniciativas de manera que dieran lugar a situaciones mutuamente beneficiosas.

3. Aplicación de los Principios Rectores en la agroindustria

69. Daira Gómes, de CEGESTI, actuó como moderadora. El panel estuvo integrado por Nirun Phitakwatchara, de la Comisión de Derechos Humanos de Tailandia; Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala; Christian Frutiger, de Nestlé; Vladimir Evtimov, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y Ylva Stiller, de Syngenta.

70. El propósito del panel era determinar las actuales prácticas de aplicación y los principales problemas y oportunidades así como las medidas necesarias para la aplicación de los Principios Rectores en el sector de la agroindustria.

71. Los panelistas examinaron la necesidad de equilibrar los ingresos generados a partir de la explotación de recursos agrícolas con la aplicación de un enfoque basado en los derechos. Durante los debates se señalaron algunos problemas: a) la falta de conocimientos sobre las normas relativas al trabajo y a los derechos humanos entre los productores, en particular sobre los Principios Rectores, y la importancia de integrar el principio de diligencia debida en relación con los derechos humanos; b) las dificultades de los pequeños agricultores para adquirir tierras y tener acceso al agua; c) la necesidad de crear cadenas de valor para asegurar mejores condiciones a los agricultores; d) la repercusión de los monocultivos en la agricultura sostenible; e) la aplicación menos rigurosa de las normas debido a la presión de la competencia entre productores; y f) la debilidad o la falta de políticas, sistemas y buena gobernanza de los productores para asegurar que cumplieran la ley.

72. Los compromisos asumidos por las empresas (Nestlé y Syngenta citaron ejemplos), de vigilar y mejorar su repercusión en los derechos humanos y colaborar con las comunidades locales para mejorar las normas laborales, se presentaron como una solución importante. Se consideró que sería preciso seguir deliberando sobre el respeto de los derechos de tenencia, y la aplicación de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, de la FAO. Cuando no se respetaban esas normas internacionales y los sistemas judiciales nacionales no se ocupaban de forma adecuada de las violaciones relacionadas con la agroindustria, las causas transfronterizas eran esenciales, por ejemplo, las iniciadas por instituciones nacionales de derechos humanos, entre ellas la de Tailandia.

73. Durante los debates se puso de relieve el derecho a la alimentación, en particular la repercusión negativa que tenía en las comunidades locales la producción en gran escala para la exportación y el posible efecto nocivo de las políticas de fijación de precios en los derechos de los agricultores. Se pidió la aplicación de normas relativas al trabajo y la fijación de precios rigurosas y de obligado cumplimiento, así como de mecanismos de reparación más sólidos para proteger a los agricultores. Un mensaje común fue la necesidad de un diálogo más amplio y la mejora de la coordinación y la cooperación entre la sociedad civil, el gobierno y el sector privado.

G. 4 de diciembre, opción paralela 2

1. Prevenir y abordar la trata de personas en empresas

74. Joy Ngozi Ezeilo, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, actuó como moderadora. El panel estuvo integrado por Beate Andrees, de la OIT; Philip Hunter, de Vérité; Jeffrey E. Tsai, del Departamento de Justicia de California; Marcel Gomes, de Repórter Brazil; y Adam Greene, de United States Council for International Business.

75. El propósito de la sesión era definir las buenas prácticas existentes y experiencias concretas en relación con la prevención y la lucha contra la trata de personas en empresas, así como los instrumentos disponibles y las medidas necesarias.

76. Se señaló que todavía se disponía de pocos conocimientos sobre la prevalencia y las causas profundas subyacentes de la trata y sobre la implicación de empresas, lo que, de nuevo, tenía repercusiones en las políticas. Se señaló la importancia de las inspecciones públicas para complementar los mecanismos voluntarios. Los oradores recordaron que el derecho internacional, en particular los Convenios de la OIT, debían ser el fundamento de las iniciativas de aplicación. También se pusieron de relieve otros instrumentos: el conjunto de instrumentos de contratación de *Verité fair*, los principios de Dhaka y la labor de la Relatora Especial sobre la elaboración de puntos de referencia e indicadores. Se expusieron dos ejemplos de políticas encaminadas a abordar la trata de personas en empresas: la Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro, de California, que disponía que las empresas debían difundir las actividades que realizaban para erradicar la trata; y el pacto nacional del Brasil para la erradicación del trabajo en condiciones de esclavitud, que incluía un marco jurídico sólido, incentivos de mercado que adoptaban la forma de una "lista sucia" de empleadores que utilizaban mano de obra en condiciones de esclavitud, y el uso de la lista por instituciones financieras, así como la colaboración de múltiples interesados.

77. En el debate se trataron varias cuestiones, entre ellas: a) la necesidad de encontrar una sabia combinación de respuestas; b) los problemas que enfrentaban las empresas para detectar la trata de personas, que solía adoptar formas sutiles, ya que quienes cometían violaciones tendían a ocultar la situación y el problema quedaba a menudo confinado al nivel "inferior" de la cadena de suministro; c) la necesidad de desglosar la trata en elementos más específicos, como el trabajo en condiciones de servidumbre, la migración y el tráfico ilícito de personas, la retención de pasaportes, la trata con fines de explotación sexual, o el servicio doméstico, así como de dar respuestas diferenciadas; d) las causas subyacentes, como la economía no estructurada, la corrupción y el delito; e) la cuestión de la responsabilidad en relación con la influencia, reflejada en los Principios Rectores; f) la necesidad de tomar en consideración las consecuencias imprevistas de los requisitos jurídicos; y g) la necesidad de ir más allá de la perspectiva limitada de la cadena de suministro.

2. Aplicación de los Principios Rectores en el sector del empleo y la contratación

78. John Morrison, de Institute for Human Rights and Business, actuó como moderador de la sesión. El panel estuvo integrado por: Nick Forster, de FSI Worldwide; Juliette de Rivero, de Human Rights Watch; Fred van Haasteren, de International Confederation of Private Employment Services Federation (Ciett); Rachel Davis, de Shift; y Felipe Burgueño del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL).

79. El propósito de esta sesión era definir los principales problemas y oportunidades en relación con el deber del Estado y la responsabilidad de las empresas de proteger y respetar respectivamente los derechos humanos en sector del empleo y la contratación, así como las medidas jurídicas y normativas eficaces para los Estados y las buenas prácticas y las opciones normativas para la empresas.

80. En los debates se destacó el hecho de que posiblemente este sector era el que tenía mayor potencial de repercusión en los derechos humanos en el mundo debido a su estrecha vinculación con los flujos migratorios. Los principales problemas que señalaron los panelistas estaban relacionados con la servidumbre por deudas en el caso de los trabajadores migrantes, la retención de los documentos de identificación, la falta de libertad de asociación, diversos tipos de abusos a los que eran sometidos los trabajadores, y el hecho de que no se impusieran sanciones a quienes no cumplían las normas. Otro problema era la falta de mecanismos efectivos de reparación para los trabajadores migrantes, que era particularmente grave cuando no podían estar protegidos por la afiliación a sindicatos. Los oradores subrayaron los problemas que planteaban los modelos tradicionales de contratación y la necesidad de que las empresas usuarias comprobaran la realidad sobre el terreno con la ayuda de expertos locales. Se recordó que las violaciones de los derechos

humanos se producían en todas las etapas del proceso de contratación y empleo, tanto en los países de origen como en los países receptores.

81. Todos los oradores, incluido el representante del sector, pidieron una reglamentación más firme a los Estados, bien colmando las lagunas existentes o bien asegurando el cumplimiento efectivo, sobre la base de la ratificación y aplicación del Convenio 181 de la OIT. Se destacó reiteradamente la guía del sector elaborada por la Comunidad Europea sobre la forma de incorporar los Principios Rectores en las operaciones de las agencias de contratación y empleo. Los panelistas también subrayaron que la aplicación de los Principios Rectores y las prácticas de contratación responsable brindaban oportunidades a las empresas.

82. En otros debates se destacó: a) la necesidad de colmar las lagunas que creaba la escasa ratificación del Convenio 181 de la OIT; c) la necesidad de disponer de marcos eficaces entre países de origen y de destino para proteger a los trabajadores migrantes; c) la preocupación por los modelos empresariales que buscaban el bajo costo de la mano de obra; d) el potencial de los requisitos de presentación de informes sobre las relaciones de las empresas con las cadenas de suministro; e) la forma de asegurar que se realizaran auditorías eficaces; f) la incoherencia normativa entre ministerios del gobierno; y g) la exclusión social de determinados grupos y las cuestiones de género. Se puso de relieve que en los Principios Rectores se esperaba que los Estados examinaran su legislación y adoptaran medidas para colmar las lagunas detectadas mediante una combinación específica de opciones normativas, en particular una reglamentación eficaz.

3. Respeto de los derechos del niño por las empresas

83. Marta Maurás, del Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) actuó como moderadora. Los panelistas fueron: Benyam Dawit Mezmur, del Comité de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas; Carmelo Angulo, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España; Porntat Amatavivadhana, de Sansiri Public Company Limited; Elana Berger, del Centro de información sobre los bancos multilaterales de desarrollo; y Ursula Wynhoven, del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

84. El propósito de la sesión era definir los principales problemas y oportunidades del cumplimiento efectivo por los Estados y las empresas de sus respectivos deberes y responsabilidades en lo tocante a prevenir y abordar las repercusiones adversas de la actividad empresarial en los derechos del niño.

85. Los panelistas subrayaron que la salvaguardia de los derechos del niño debería ir más allá de la norma de no ocasionar daños. Se señaló la utilidad de la observación general N° 16 del Comité de los Derechos del Niño como hoja de ruta para regular el sector empresarial a fin de que respetara los derechos del niño. Se destacó que las medidas voluntarias de las empresas no reemplazaban las medidas y los reglamentos del Estado, y que los Estados tenían que actuar de forma concertada y en cooperación. El actual marco jurídico para la protección de los derechos del niño revestía una importancia crucial, al igual que la función de la cooperación internacional para asegurar su aplicación. Se observó que los Estados tenían que adoptar un enfoque proactivo, reglamentar el sector privado y esforzarse por garantizar el derecho del niño a obtener reparación. El trabajo infantil se planteó como cuestión que revestía particular importancia.

86. Los participantes citaron ejemplos de iniciativas efectivas de promoción y protección de los derechos del niño. Entre los principales factores de éxito cabía citar la medición del éxito mediante los resultados, la conclusión de procesos completos de diligencia debida y la opinión esencial de que los derechos del niño eran los derechos de todos. Durante la última parte de la sesión, el debate interactivo se centró, entre otras cosas, en: a) la publicación de los derechos del niño y los principios empresariales por el Pacto Mundial, el UNICEF y Save the Children; b) los medios para que las empresas pudieran

comprender mejor sus obligaciones y los Estados apoyaran sus esfuerzos; c) el mejor interés del niño; y d) la necesidad de aplicar con eficacia los instrumentos jurídicos existentes.

87. En los debates también se señaló que las empresas deberían tomar en consideración los riesgos y las consecuencias de sus operaciones así como la función que podían desempeñar en su propio sector y en otros ámbitos, en particular en la promoción de políticas públicas.

H. 4 de diciembre, opción paralela 3

1. Integración de los derechos humanos en los contratos y las políticas internacionales de inversión

88. Andrea Saldarriaga, de Vale Columbia Center on Sustainable International Investment, actuó como moderadora. Los panelistas fueron: Renato Torres, del Gobierno del Ecuador; Zachary Douglas, de Graduate Institute Geneva; Viviane Schiavi, de la Cámara de Comercio Internacional; Samuel Nguiffo, de Center for Environment and Development; y Elisabeth Tuerk, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

89. El propósito de la sesión era definir los principales problemas y oportunidades de la integración de los derechos humanos en las políticas y prácticas internacionales de inversión.

90. Se recordaron a los participantes los Principios de contratación responsable¹⁰ elaborados por quien fuera Representante Especial del Secretario General en el ámbito de las empresas y los derechos humanos, que ofrecían a los Estados y a los negociadores orientaciones prácticas sobre la forma de integrar en las negociaciones de contratos la gestión del riesgo para los derechos humanos. Los panelistas destacaron la importancia que revestían los derechos humanos en el contexto de las inversiones en sus respectivas áreas de actividad, en particular en la negociación de contratos y tratados de inversión, en las decisiones de los tribunales de arbitraje en caso de controversias sobre inversiones, y en la estructuración y ejecución de proyectos de inversiones. No obstante se observó que el debate sobre las cuestiones de derechos humanos en el contexto de las inversiones se hallaba en las etapas iniciales y que era necesario seguir trabajando en la difusión y aplicación de los Principio Rectores y los Principios de contratación responsable en esta esfera. Se estimó que el marco de la UNCTAD sobre políticas de inversión para el desarrollo sostenible era una de las principales vías para la integración de los derechos humanos en este ámbito y que promovía la armonización con los Principio Rectores. También se señaló que la guía de la Cámara Internacional de Comercio era un instrumento útil.

91. En las exposiciones de los panelistas y en otros debates se abordaron diversos problemas en esta esfera, entre ellos: a) la falta de coordinación y coherencia de políticas entre departamentos gubernamentales; b) la necesidad de creación de capacidad entre todos los actores pertinentes; c) la necesidad de institucionalizar los derechos humanos en el contexto de las inversiones internacionales para permitir la aplicación judicial; d) los desequilibrios percibidos entre Estados e inversores; e) la carga financiera que afrontaban los Estados que se enfrentaban a procesos de arbitraje de controversias; y f) la falta de transparencia y de acceso a la información.

¹⁰ A.HRC.17.31.Add.3.

2. Sector financiero: hacia una mayor claridad sobre la forma de aplicar los Principios Rectores

92. Bennett Freeman, de Calvert Investments, actuó como moderador. El panel estuvo integrado por: Roel Nieuwenkamp, de la OCDE; Liselotte Arni, de la UBS; Daniel Schydrowsky, de la Superintendencia de Bancos del Perú, administradores de seguros y del sistema privado de pensiones; Pierre Hubbard, de Global Unions Committee on Workers Capital; y Andreas Missbach, de BankTrack.

93. El propósito de esta sesión era definir las tendencias de la aplicación de los Principios Rectores al sector financiero y los principales problemas que había que afrontar para asegurar su aplicación efectiva en el sector.

94. Se destacó el creciente movimiento entre actores del sector financiero para comprender la importancia y objetividad de los riesgos en materia de derechos humanos. Un elemento relevante de ese movimiento eran las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, cuyo capítulo sobre los derechos humanos se basaba en los Principios Rectores. Las Directrices presentaban una responsabilidad innovadora respecto de la cadena de suministro que incluía también a partes del sector financiero, entre ellas, bancos, capital privado, fondos especulativos de cobertura, gestores de activos, fondos y compañías de seguros. Se mencionó un debate reciente sobre la responsabilidad de los accionistas minoritarios. Se señaló que, si bien a los inversores no les incumbía la responsabilidad principal de las consecuencias en los derechos humanos de las operaciones de las empresas en las que invertían, los Principios Rectores y las Directrices de la OCDE establecían claramente que a todos los inversores les incumbía la responsabilidad de utilizar su influencia. No obstante, se trataba de cuestiones muy complejas y se pidieron varias aclaraciones, en particular acerca de la repercusión de las disposiciones de los Principios Rectores sobre las "relaciones empresariales", y con miras a concretar lo que significaba para una empresa que estuviera "directamente relacionada con" una violación de los derechos humanos.

95. Durante las exposiciones se examinó un documento de debate publicado por el Grupo Thun, un grupo de siete bancos que había intercambiado opiniones sobre las repercusiones de los Principios Rectores en el sector bancario. El documento señalaba que los bancos tenían que disponer de una política sobre derechos humanos y de procesos de diligencia debida, y se indicó que representaba un "cambio de paradigma" ya que tomaba en consideración los derechos humanos en el sector bancario a pesar de sus deficiencias.

96. También se abordó el motivo por el cual los reguladores del sector financiero deberían comenzar a tener en cuenta el proceso de diligencia debida en relación con los derechos humanos: el hecho de exigir que las empresas y los bancos tomaran en consideración los riesgos y costos de los conflictos sociales podía tener repercusiones positivas en la economía en general.

97. A continuación se enumeran algunas de las principales cuestiones que se plantearon en el debate: a) la necesidad de que los gestores de activos utilizaran su influencia si se les notificaban violaciones de los derechos humanos, y establecieran prioridades; b) los costos de los requisitos relativos a la reglamentación y la diligencia debida eran considerablemente inferiores a los costos de tener que afrontar de forma adecuada los riesgos en materia de derechos humanos; c) en algunas jurisdicciones las disposiciones no vinculantes estaban pasando a ser normas imperativas; d) la importancia de los planes de acción nacionales del gobierno; e) la observación de que en los Principios Rectores se establecía que la diligencia debida era un proceso en curso.

3. Finanzas públicas: aplicación de los Principios Rectores a las instituciones financieras públicas

98. Bonita Meyersfeld, de Center for Applied Legal Studies, actuó como moderadora. Los panelistas fueron: Jaime Gorstejn, del Banco Nacional para el Desarrollo Económico y

Social del Brasil (BNDES); Kamil Zabielski, de Norway's Export Credit Agency GIEK; Juana Kweitel, de Conectas; Eleni Kyrou, del Banco Europeo de Inversiones; y Andrea Shemberg, de London School of Economics Investment and Human Rights Project.

99. El propósito de esta sesión era aportar mayor claridad sobre la forma en que los Principio Rectores se aplicaban a las instituciones financieras públicas, así como identificar las buenas prácticas y los principales problemas y prioridades para promover la aplicación.

100. Las exposiciones y los debates sobre la aplicación de los Principios Rectores a las instituciones financieras públicas giraron en torno a las cuestiones de la rendición de cuentas, la transparencia en relación con la confidencialidad, y la función de esas instituciones en el fomento de la incorporación de consideraciones relativas a los derechos humanos en proyectos que estas financiaban. En cuanto a la transparencia, los panelistas preguntaron si se hacía demasiado hincapié en la confidencialidad o si los bancos podían ser más transparentes sin comprometer la confidencialidad de los clientes. La mayoría de los participantes convinieron en que la transparencia en relación con los derechos humanos no debía quedar limitada por la confidencialidad de los clientes. Se observó que no debería confundirse responsabilidad con influencia, ya que la influencia era importante para que la entidad financiera pudiera asegurar el cumplimiento. Los panelistas también deliberaron sobre la cuestión de que las empresas estatales eran entidades públicas y al parecer tenían que respetar los pilares uno y tres de los Principio Rectores.

101. En cuanto a la rendición de cuentas, los panelistas y los participantes destacaron que deberían establecerse mecanismos de reclamación sólidos que ofrecieran a los interesados la posibilidad de presentar reclamaciones contra instituciones financieras públicas cuando determinados proyectos respaldados por estas violaran sus derechos. Algunos participantes sugirieron que las instituciones financieras públicas entablaran consultas con organizaciones de la sociedad civil y con otros interesados antes de tomar sus decisiones en materia de inversiones.

102. En cuanto a la transparencia, los participantes alentaron a las instituciones financieras públicas a difundir información acerca de sus proyectos e indicaron que la defensa de los derechos fundamentales tenían precedencia sobre las cuestiones relacionadas con la confidencialidad y el secreto bancario.

I. 4 de diciembre, opción paralela 4

1. La gobernanza empresarial y los Principios Rectores

103. Vanessa Zimmerman, de Rio Tinto, actuó como moderadora. El panel estuvo integrado por: Hiroshi Ishida, de Caux Roundtable, Japón; Hans Petter Graver, representante del punto de contacto nacional de Noruega en relación con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; Armando Tripodi, de Petrobras; Laura Ceresna-Chaturvedi, de Civep; y Joane Goddard, de Aviva Public Limited Company.

104. El propósito de la sesión era: a) identificar y evaluar los principales sistemas empresariales de gestión y control como vías para la aplicación efectiva de los Principios Rectores; b) examinar instrumentos y enfoques innovadores de entidades reguladoras de los Estados, inversores, la sociedad civil e interesados afectados para evaluar la eficacia del desempeño empresarial en relación con los derechos humanos; y c) evaluar los puntos de convergencia y los principales problemas restantes para lograr la integración del principio de diligencia debida en relación con los derechos humanos en las actividades de las empresas y la supervisión externa.

105. La sesión se centró en la armonización de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos con la gobernanza empresarial, a saber, las prácticas y sistemas mediante los cuales una empresa controla sus actividades. Los panelistas

consideraron que la buena gobernanza empresarial y el respeto de los derechos humanos se reforzaban mutuamente: a las empresas que contaban con una buena gobernanza les podía resultar más fácil incorporar el respeto de los derechos humanos. Los panelistas deliberaron sobre la importancia de anclar firmemente el respeto de los derechos humanos en los sistemas y procesos de gestión, así como de disponer de procesos sólidos para determinar y evaluar lo antes posible los riesgos, y de proceder a su integración en la empresa. Se indicó que la existencia de políticas y procesos era un primer paso importante, pero que la aplicación sobre el terreno era esencial y podía suponer un desafío.

106. Los debates también se centraron en la importancia de lograr la participación de los representantes de los trabajadores y los interesados externos. Esto último podía resultar difícil ya que era necesario enlazar el plano interior de las políticas de gobernanza con el plano exterior de los riesgos en materia de derechos humanos. A las organizaciones de la sociedad civil a menudo les podía resultar difícil acceder a información importante sobre políticas y procesos empresariales. También se examinó la experiencia adquirida con los puntos de contacto nacionales; la gobernanza empresarial era una parte importante de las recomendaciones dimanantes de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales que destacaban específicamente la importancia de esa gobernanza. Los participantes también indicaron que muchos inversores eran cada vez más conscientes de que los derechos humanos formaban parte de los procesos de buena gobernanza, y que algunos inversores veían que las empresas prestaban cada vez mayor atención a esta cuestión en su cartera. Por último, los panelistas examinaron la importante función que podían desempeñar los gobiernos para garantizar una buena gobernanza empresarial, por ejemplo, asegurando que el derecho de sociedades no limitara a las empresas con respecto a los derechos humanos, e imponiendo la obligación de presentar informes.

107. Durante el debate se abordaron, entre otras, las siguientes cuestiones importantes: a) las empresas podían haber realizado una gran labor en torno a la integración de los derechos humanos en la gobernanza empresarial pero la información no estaba llegando necesariamente a otros interesados; b) algunas políticas causaban buena impresión sobre el papel pero carecían de significado si no se aplicaban; c) la buena gobernanza empresarial y la diligencia debida en relación con los derechos humanos tendían a reforzarse mutuamente.

2. ¿Promovían las iniciativas de múltiples interesados buenas prácticas en la aplicación de los Principios Rectores?

108. Michael Posner, de New York University Business School, actuó como moderador. El panel estuvo integrado por Peter McAllister, de Ethical Trade Initiative (ETI); Christy Hoffman, de UNI Global Union; Amelia Evans, de Institute for Multi-Stakeholder Initiative Integrity; Anne-Marie Buzatu; del Centro de Ginebra para el control democrático de las Fuerzas Armadas; y Mark Hodge, de Global Business Initiative on Human Rights.

109. El propósito de esta sesión era determinar las enseñanzas extraídas sobre la forma en que las iniciativas de múltiples interesados podían ayudar a promover la aplicación de los Principios Rectores y los elementos que requerían esas iniciativas para ser eficaces.

110. En las presentaciones se reiteró que el deber de los Estados de ofrecer protección frente a las violaciones de los derechos humanos resultantes de las actividades empresariales era primordial, pero que en realidad existían un entorno de lagunas de gobernanza y el enfoque de múltiples interesados era *una* forma de colmar algunas de ellas. Los oradores pusieron de relieve que las iniciativas de múltiples interesados no deberían considerarse como *la* solución sino como una opción de la que disponían los interesados a coto y medio plazo. Se indicó que la labor sobre esas iniciativas no había concluido todavía. Se expusieron las experiencias de ETI, del Acuerdo de Bangladesh y del Código de Conducta Internacional. Los panelistas se centraron en los factores o criterios necesarios para que las iniciativas de múltiples interesados pudieran prevenir y abordar con eficacia las consecuencias negativas en los derechos humanos, en particular elementos esenciales como el hecho de estar basados en el derecho internacional, la necesidad de contar con mecanismos de

reclamación para los interesados afectados, la vigilancia y la buena gobernanza, la transparencia, la disponibilidad recursos suficientes, y la obtención de resultados tangibles sobre el terreno. Se puso de relieve un instrumento del Institute for Multi-Stakeholder Initiative Integrity sobre criterios esenciales de eficacia difundido en 2014.

111. También se resaltaron otras iniciativas, entre ellas, los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, Global Network Initiative, Fair Food Program, las orientaciones de la OCDE sobre la diligencia debida en relación con los minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos, y el Proceso de Nairobi. Se observó que las iniciativas con mayor potencial de participación activa de las empresas estaban basadas en la aplicación a nivel local y contaban con la participación de comunidades afectadas y agentes locales.

112. Las preguntas y respuestas se centraron en: a) diversos aspectos de la evaluación de la eficacia de las iniciativas de múltiples interesados; b) cuestiones relativas al conflicto de intereses de las partes interesadas; c) la necesidad de abordar todas las causas fundamentales de las lagunas en la gobernanza; d) las diferentes funciones que desempeñaban las organizaciones de la sociedad civil basadas en las actividades operacionales y en la promoción respectivamente; e) la función de los sindicatos; y f) la participación de los gobiernos.

113. Un problema que permanecía sin resolver era la necesidad de asegurar un auténtico marco de confianza que permitiera lograr tanto una verdadera rendición de cuentas como la participación de las empresas. Por último, se observó que era necesario buscar enfoques para cada empresa y para cada país, y que no existía una solución única.

3. Opciones para la presentación eficaz de informes sobre derechos humanos

114. Richard Howitt, Miembro del Parlamento Europeo, actuó como moderador. Los panelistas fueron: Andrea Pradilla, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en nombre del Grupo de amigos del párrafo 47 de Rio + 20; Scott Busby, del Gobierno de los Estados Unidos; Teresa Fogelberg, de Global Reporting Initiative; Caroline Rees, de Shift; y Amol Mehra, de International Corporate Accountability Roundtable.

115. El propósito de esta sesión era determinar las actuales formas de presentación de informes sobre derechos humanos establecidas por el gobierno para las empresas y su funcionamiento, evaluar cómo se armonizaban las actuales iniciativas de presentación de informes no financieros con los Principios Rectores y cómo podían hacerse efectivas las normas de presentación de informes sobre derechos humanos para las empresas.

116. Las observaciones iniciales pusieron de relieve que a) la transparencia era útil para promover una buena actuación empresarial; b) una presentación de informes adecuada no debía ser una carga y ni ser insostenible financieramente; y c) estaba avanzando el proceso que estaba en curso en Europa para introducir requisitos de presentación de informes no financieros en el derecho de sociedades. El panel examinó: a) las experiencias en torno a los requisitos del Gobierno de los Estados Unidos para la presentación de informes sobre inversiones en Myanmar y el suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto en la República Democrática del Congo en el marco de la Ley Dodd-Frank; b) la iniciativa impulsada por el gobierno del Grupo de amigos del párrafo 47, que trataba de promover la sostenibilidad empresarial como instrumento esencial para lograr el desarrollo sostenible; y c) la interrelación entre Global Reporting Initiative y los Principios Rectores. Se mencionaron las prácticas gubernamentales de Francia, Dinamarca, Noruega y Colombia. Se expuso brevemente una iniciativa específica para establecer marcos públicos de divulgación y garantía basados en los Principios Rectores (Iniciativa sobre marcos de divulgación y garantía). Algunas de las cuestiones que planteaba esta iniciativa eran: qué tipo de información se consideraba importante para que la comunicaran las empresas (tanto para la propia empresa como para los interesados externos, en particular inversores y

comunidades afectadas) y qué se consideraba una buena garantía. Las observaciones pusieron de relieve la necesidad de que los gobiernos no solo aplicaran medidas reguladoras adecuadas, sino que aseguraran también el cumplimiento efectivo de los requisitos de presentación de informes, y destacaron que los informes sobre derechos humanos era esencialmente diferentes de los informes sobre sostenibilidad en general, ya que en última instancia se trataba de hacer frente a las consecuencias negativas posibles y reales en los derechos humanos.

117. En los debates se trataron cuestiones como : a) la forma de lograr la participación de los interesados afectados para determinar la importancia de los datos que se incluían en los informes; b) la necesidad de establecer una distinción entre la presentación formal de informes y una comunicación de la empresa a los interesados sobre los riesgos, las consecuencias y las respuestas en relación con los derechos humanos, tal como se ponía de relieve en los Principios Rectores; c) las consecuencias de la Ley Dodd–Frank sobre el terreno; d) las opciones de aplicación coercitiva del gobierno; e) la limitación que suponía tratar cuestiones delicadas en informes públicos; f) la función que desempeñaba el sector de las garantías al aportar conocimientos especializados para la elaboración de normas; g) una iniciativa de 33 países de las Américas en la que participaban Jefes de Estado para elaborar planes de acción nacionales sobre la responsabilidad social empresarial y la presentación de informes sobre sostenibilidad; h) la presentación de informes por organismos públicos; e i) la presentación de informes sobre las consecuencias en los pueblos indígenas.

118. Se observó que las actuales tendencias apuntaban a una conjunción de las actividades de presentación de informes sobre derechos humanos y sobre sostenibilidad, y que los acontecimientos en esta esfera estaban avanzando. Se llegó, entre otras, a las siguientes conclusiones: que la presentación de informes oficiales no era una panacea, y que unos informes de mejor calidad podían mejorar la comunicación y el diálogo entre los interesados; b) que la presentación de informes públicos oficiales era necesaria para asegurar la rendición de cuentas; y c) que, hasta la fecha, unas 2.000 empresas presentaban informes sobre sostenibilidad que incluían referencias a los derechos humanos, pero la cantidad y la calidad de la información variaba considerablemente.

J. Panel de clausura: prioridades y cuestiones fundamentales para 2014

119. La sesión fue presidida por el Presidente del Foro. Los distinguidos panelistas fueron : Mary Robinson, de Mary Robinson Foundation – Climate Justice; Aron Cramer, de Business for Social Responsibility; Aisha Abdullahi, Comisionada de Asuntos Políticos de la Comisión de la Unión Africana; William Echikson, de Google Corporation; y Debbie Stothard, de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y Altsean-Burma. La Presidenta del Grupo de Trabajo, Alexandra Guáqueta, pronunció el discurso de clausura.

120. El propósito de la sesión de clausura era determinar las principales cuestiones y prioridades en relación con el tema de las empresas y los derechos humanos para 2014, así como las oportunidades para promover la aplicación amplia y eficaz de los Principios Rectores, y mejorar el diálogo y la cooperación entre los múltiples interesados.

121. En la primera parte de la sesión de clausura los oradores se centraron en las prioridades y las cuestiones que era preciso abordar durante 2014, al tiempo que se evaluaban las contribuciones aportadas por el presente Foro al programa relativo a las empresas y los derechos humanos. Mary Robinson pidió que 2014 fuera un año en el que se adoptaran medidas estratégicas y concertadas para obtener resultados, y puso de relieve los vínculos existentes entre la cuestión de las empresas y los derechos humanos y los programas relativos al cambio climático y los derechos humanos. Adam Cramer expuso brevemente algunas cuestiones a las que era necesario seguir prestando atención, en particular: lograr la participación de un mayor número de empresas, conseguir que los

derechos humanos se incluyeran cada vez más en las operaciones esenciales de las empresas, y examinar los cambios sistémicos y la intersección de derechos humanos e innovación en las empresas. Aisha Abdullahi dijo que los Principio Rectores brindaban la oportunidad de actuar a nivel regional en África mediante la integración del marco en las políticas y estrategias pertinentes. La oradora expuso los planes de la Comisión de la Unión Africana para colaborar con el Grupo de Trabajo en la celebración de un foro regional en 2014. William Echikson señaló la forma en que la vigilancia del gobierno planteaba un grave problema para la existencia de Internet, insistió en su apertura y en su fuerza para generar nuevas ideas. Por último, Debbie Stothard puso de relieve en particular la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos, la necesidad de disponer de recursos adecuados en caso de violaciones, y la posible elaboración de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante.

122. Otros participantes en el Grupo de Trabajo formularon recomendaciones, entre ellas que el Grupo investigara ámbitos tan diversos con la salud sexual y reproductiva, la legislación sobre la competencia, los derechos humanos en las empresas y los planes de estudios, y los derechos humanos y el deporte. Los oradores destacaron la importancia de los Principio Rectores y la necesidad de que se procediera a su aplicación eficaz y generalizada.

123. En su discurso de clausura la Presidenta del Grupo de Trabajo expuso sus opiniones sobre la repercusión del Foro. Reconoció que algunos de los debates más difíciles se habían centrado en la cuestión de la responsabilidad de las empresas, un tema complejo. También instó a los Estados y las empresas a que actuaran sin demora, en el marco de sus respectivas funciones, para hacer frente a los múltiples casos de amenazas que afrontaban los defensores de los derechos humanos. La Sra. Guáqueta reconoció la función primordial que desempeñaban las instituciones nacionales de derechos humanos y describió otros medios de acción, en particular: a) un mayor compromiso de los Estados mediante planes de acción nacionales; b) el compromiso de las organizaciones regionales para integrar los Principios Rectores en sus cartas, políticas y sistemas de justicia y rendición de cuentas; c) la integración de los Principios Rectores en la agenda para el desarrollo después de 2015 así como en la labor de las instituciones mundiales y del sistema de las Naciones Unidas; d) la creación de un fondo mundial para el fomento de la capacidad; y e) la adaptación de los objetivos de la labor del Grupo de Trabajo. La oradora expresó su agradecimiento a todos los participantes y organizadores del Foro que había sido fructuoso y pertinente.
